



## Asamblea General

Distr. general  
19 de abril de 2012  
Español  
Original: inglés

---

### Consejo de Derechos Humanos

19º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,  
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,  
incluido el derecho al desarrollo**

### **Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos\***

#### **19/38. Repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos de la no repatriación a los países de procedencia de los fondos de origen ilícito, e importancia de mejorar la cooperación internacional**

*El Consejo de Derechos Humanos,*

*Reafirmando* los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

*Guiado* por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre el derecho al desarrollo, la Declaración y el Programa de Acción de Viena y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos,

*Recordando* las resoluciones de la Asamblea General 60/251, de 15 de marzo de 2006, 62/219, de 22 de diciembre de 2007, y 65/281, de 17 de junio de 2011, y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 5/2, de 18 de junio de 2007, 11/11, de 18 de junio de 2009, y 16/21, de 25 de marzo de 2011,

*Recordando también* las resoluciones de la Asamblea General 54/205, de 22 de diciembre de 1999, 55/61, de 4 de diciembre de 2000, 55/188, de 20 de diciembre de 2000, 56/186, de 21 de diciembre de 2001, y 57/244, de 20 de diciembre de 2002, 58/205, de 23 de diciembre de 2003, 59/242, de 22 de diciembre de 2004, 60/207, de 22 de diciembre de 2005, 61/209, de 20 de diciembre de 2006, 62/202, de 19 de diciembre de 2007, 63/226, de 19 de diciembre de 2008, 64/237, de 24 de diciembre de 2009 y 65/169, de 20 de diciembre de 2010,

*Recordando además* la resolución 17/23 del Consejo de Derechos Humanos, de 17 de junio de 2011,

---

\* Las resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos se publicarán en el informe del Consejo sobre su 19º período de sesiones (A/HRC/19/2), cap. I.

*Reiterando* el compromiso de velar por el goce efectivo de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, de todas las personas, y la obligación de todos los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales,

*Reafirmando* que todos los pueblos pueden disponer libremente, para sus propios fines, de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones dimanantes de la cooperación económica internacional, atendiendo al principio del beneficio mutuo, y del derecho internacional, y que en ningún caso puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia,

*Reconociendo* que la corrupción constituye una importante barrera para la movilización y asignación efectivas de recursos y que desvía recursos de actividades que son esenciales para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y el desarrollo económico y sostenible,

*Alarmado* por los casos de corrupción que afectan a ingentes cantidades de activos, que pueden constituir una parte sustancial de los recursos de los Estados, y que la estabilidad política y el desarrollo sostenible de dichos Estados pueden verse amenazados en caso de que se les prive de ellos, lo que tiene además una repercusión negativa en la asignación por los Estados del máximo de los recursos disponibles a hacer plenamente efectivos todos los derechos humanos para todos,

*Profundamente preocupado* porque el fenómeno de la corrupción y la transferencia de fondos de origen ilícito afecta gravemente al disfrute de los derechos humanos, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, en particular el derecho al desarrollo, y puede poner en peligro la estabilidad y la seguridad de las sociedades, socavar los valores de la democracia y la moral y atentar contra el desarrollo social, económico y político, especialmente cuando una respuesta nacional e internacional inadecuada da lugar a la impunidad,

*Recordando* la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y celebrando que vaya en aumento el número de Estados partes en ella,

*Tomando nota* de la labor que llevan a cabo diferentes órganos de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como las organizaciones internacionales y regionales, en la prevención de todas las formas de corrupción y la lucha contra este fenómeno,

*Reconociendo* que el apoyo de los sistemas jurídicos nacionales es esencial para prevenir y combatir las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito y conseguir la repatriación de dichos activos, y recordando que la lucha contra todas las formas de corrupción exige instituciones fuertes a todos los niveles, incluido a nivel local, que puedan adoptar medidas preventivas y de orden público efectivas, acordes con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en particular con sus capítulos II y III,

*Celebrando* la labor continua de la Conferencia de los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el marco de sus diversos grupos de trabajo intergubernamentales, de supervisar el proceso de examen de la aplicación de la Convención, asesorar sobre la prestación de asistencia técnica para el fomento de la capacidad institucional y humana en los Estados partes a fin de prevenir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional, particularmente en la repatriación de los fondos de origen ilícito,

*Afirmando* las responsabilidades de los Estados requirentes y los Estados requeridos en la repatriación de los fondos de origen ilícito, consciente de que los países de origen

deben buscar la repatriación como parte de su obligación de asegurar la asignación del máximo de los recursos disponibles para hacer plenamente efectivos los derechos humanos de todos, incluido el derecho al desarrollo, hacer frente a las violaciones de los derechos humanos y luchar contra la impunidad, y que los países receptores, por otro lado, tienen el deber de prestar asistencia y facilitar la repatriación como parte de su obligación de cooperación y prestación de asistencia internacionales en virtud de los capítulos IV y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, en la esfera de los derechos humanos y en consonancia con el compromiso contraído en la Cumbre Mundial de 2005, de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad a todos los niveles y de impedir la transferencia ilícita de fondos,

*Preocupado* ante las dificultades, en particular de tipo práctico, a que se enfrentan tanto los Estados requirentes como los Estados requeridos a la hora de repatriar fondos de origen ilícito, teniendo en cuenta la especial importancia que reviste la recuperación de los activos robados para la estabilidad y el desarrollo sostenible, y observando las dificultades que plantea la aportación de información que establezca un vínculo entre el producto de la corrupción en el Estado requerido y el delito cometido en el Estado requirente, que, en muchos casos, puede ser difícil de demostrar, habida cuenta de que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser considerado en principio inocente hasta que se demuestre su culpabilidad conforme a derecho,

*Reconociendo* los avances conseguidos para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aunque consciente de que los Estados siguen teniendo dificultades para recuperar los fondos de origen ilícito debido, entre otras cosas, a las diferencias en los ordenamientos jurídicos, la complejidad de llevar a cabo investigaciones y procesamiento en varias jurisdicciones, la falta de familiaridad con los procedimientos de asistencia judicial recíproca de algunos Estados y las dificultades para determinar el flujo de fondos de origen ilícito, y observando las dificultades concretas que plantea su recuperación en los casos de las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas y de sus familiares y colaboradores cercanos, y reconociendo también que las dificultades legales se ven exacerbadas a menudo por obstáculos materiales e institucionales,

*Observando con profunda preocupación* que, tal como se indicó en el Estudio completo sobre las repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, de la no repatriación a los países de origen de los fondos adquiridos ilícitamente<sup>1</sup>, solo alrededor del 2% de los fondos que se estiman de origen ilícito y que anualmente salen del mundo en desarrollo son repatriados a sus países de origen,

*Tomando nota* de la especial inquietud de los países en desarrollo y los países con economías en transición respecto de la devolución de activos de origen ilícito derivados de la corrupción, en particular a los países de los que proceden, de conformidad con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en especial del capítulo V de esta, de forma que ello permita a los países diseñar y financiar proyectos de desarrollo con arreglo a sus prioridades nacionales, habida cuenta de la importancia que dichos activos pueden tener para su desarrollo sostenible,

*Convencido* de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el estado de derecho, y destacando que cualquier recurso del que se vea privado el Estado debido a la corrupción tiene potencialmente los mismos efectos negativos, independientemente de que se envíe fuera del país o se retenga en él,

<sup>1</sup> A/HRC/19/42.

1. *Toma nota con aprecio* del Estudio completo preparado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, de la no repatriación a los países de origen de los fondos adquiridos ilícitamente;

2. *Exhorta* a todos los Estados que todavía no se hayan adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a que consideren la posibilidad de hacerlo como cuestión de prioridad;

3. *Afirma* la urgente necesidad de repatriar los fondos ilícitos a los países de origen sin condiciones, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y con el compromiso manifestado en la Cumbre Mundial de 2005 de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad a todos los niveles y de impedir la transferencia ilícita de fondos, e insta a los Estados a que intensifiquen sus esfuerzos para localizar, congelar y recuperar dichos fondos;

4. *Reconoce* la importancia de respetar las normas internacionales de derechos humanos en relación con la repatriación de fondos de origen ilícito, entre otras cosas promoviendo la coherencia respecto de las políticas relacionadas con los derechos humanos en las deliberaciones y actuaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y en el proceso intergubernamental de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

5. *Invita* a la Conferencia de los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a que estudie formas de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos a la hora de aplicar la Convención, entre otras cosas cuando se ocupe de la repatriación de los fondos de origen ilícito, y manifiesta su aprecio por los constantes esfuerzos que ha realizado el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos de la Conferencia para ayudar a los Estados partes a cumplir las obligaciones que les incumben con arreglo a la Convención de prevenir, detectar e impedir con mayor eficacia la transferencia internacional de fondos de origen ilícito y fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos, teniendo presente que, independientemente de la capacidad, los recursos y la disposición de las instituciones y las autoridades del Estado requirente, existe una sociedad que sufre las consecuencias de la transferencia de esos fondos;

6. *Acoge con beneplácito* la decisión adoptada en la Cuarta Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de organizar reuniones intergubernamentales de expertos de composición abierta sobre la cooperación internacional, a fin de ofrecer asesoramiento y ayuda a los Estados en relación con la extradición y la asistencia judicial recíproca, toma nota con satisfacción de la Iniciativa de recuperación de activos robados del Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y alienta a que haya coordinación entre las iniciativas en marcha;

7. *Exhorta* a una mayor cooperación internacional, entre otras formas a través del sistema de las Naciones Unidas, en apoyo de las iniciativas nacionales, subregionales y regionales para prevenir y combatir las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito, de conformidad con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y, a este respecto, alienta a que se establezca una estrecha cooperación a nivel nacional e internacional entre los organismos de lucha contra la corrupción, los organismos de seguridad y las dependencias de inteligencia financiera;

8. *Exhorta* a todos los Estados a los que se solicite la repatriación de fondos de origen ilícito a que respeten plenamente su compromiso de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad a todos los niveles y de impedir la transferencia ilícita de fondos,

y a que reconozcan que, al cumplir con sus obligaciones a este respecto en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tienen también la responsabilidad, respecto de las sociedades afectadas por la corrupción, de hacer todo lo posible para lograr la repatriación a los países de procedencia de los fondos de origen ilícito, a fin de reducir las repercusiones negativas de la no repatriación, entre otras cosas en relación con el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, en los países de origen, entre otras formas reduciendo los obstáculos impuestos a los países requirentes en la etapa de rastreo de los fondos y mejorando la cooperación a este respecto entre los organismos de lucha contra la corrupción, los organismos de seguridad y las dependencias de inteligencia financiera, en particular teniendo en cuenta los riesgos de que los fondos se dispendien y, cuando proceda, desvinculando las medidas de decomiso del requisito de que exista una condena en el país de origen;

9. *Exhorta también* a todos los Estados que soliciten la repatriación de fondos de origen ilícito a que respeten plenamente su compromiso de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad a todos los niveles y de impedir la transferencia ilícita de fondos, y a que apliquen los principios de rendición de cuentas, transparencia y participación en el proceso de toma de decisiones sobre el modo de asignar los fondos repatriados para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de mejorar los procedimientos de prevención y detección, corregir las deficiencias o los problemas de gestión observados, impedir la impunidad, ofrecer recursos efectivos a fin de crear las condiciones necesarias para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos, y mejorar la administración de justicia en general;

10. *Reafirma* la obligación de los Estados de investigar la corrupción y enjuiciar a los culpables, exhorta a todos los Estados a reforzar el procedimiento penal para la congelación o imposición de restricciones a los fondos de origen ilícito, y alienta a los Estados que soliciten la repatriación de fondos a velar por que se pongan en marcha y entren en funcionamiento procedimientos nacionales de investigación adecuados, a los efectos de presentar solicitudes de asistencia jurídica mutua y, en este contexto, alienta a los Estados requeridos a que proporcionen al Estado requirente, cuando proceda, información sobre los marcos y procedimientos jurídicos existentes;

11. *Subraya* que las empresas tienen también la obligación de respetar todas las leyes aplicables y los derechos humanos y que es necesario que las víctimas tengan más acceso a recursos efectivos, a fin de lograr la prevención y la reparación efectivas de las vulneraciones de los derechos humanos relacionadas con empresas, como se establece en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos<sup>2</sup>;

12. *Destaca* la necesidad de transparencia en las instituciones financieras y de que los intermediarios financieros apliquen medidas efectivas de debida diligencia, exhorta a los Estados a que busquen medios adecuados, de conformidad con sus obligaciones internacionales, para asegurar la cooperación y la debida atención de las instituciones financieras ante solicitudes extranjeras de congelación y recuperación de fondos de origen ilícito y la existencia de un sistema de asistencia jurídica recíproca eficaz para responder a los Estados que soliciten la repatriación de esos fondos, y alienta a que se fomente la capacidad institucional y de recursos humanos al respecto;

13. *Solicita* al Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos que presente al Consejo de Derechos Humanos, en su 22º período de sesiones, un estudio exhaustivo de las repercusiones negativas de la no

<sup>2</sup> A/HRC/17/31, anexo.

repatriación al país de procedencia de los fondos de origen ilícito en la asignación por los Estados del máximo de los recursos disponibles para hacer plenamente efectivos todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, prestando especial atención a los países en desarrollo y a los países con economías en transición que tienen la carga de la deuda externa;

14. *Solicita* a la Alta Comisionada que señale la presente resolución a la atención de los Estados Miembros y los diferentes foros que se ocupan de las cuestión de la repatriación de los fondos de origen ilícito dentro del sistema de las Naciones Unidas, a fin de que la estudien y adopten las medidas necesarias y de coordinación que procedan, en particular en el contexto de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

15. *Decide* seguir examinando la cuestión en relación con el mismo tema de la agenda.

55ª sesión  
23 de marzo de 2012

[Aprobada en votación registrada por 35 votos contra 1 y 11 abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente:

*Votos a favor:*

Arabia Saudita, Angola, Bangladesh, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Chile, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Ecuador, Federación de Rusia, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Jordania, Kuwait, Kirguistán, Libia, Malasia, Maldivas, Mauricio, Mauritania, México, Nigeria, Perú, Qatar, Senegal, Tailandia, Uganda, Uruguay.

*Votos en contra:*

Estados Unidos de América.

*Abstenciones:*

Austria, Bélgica, España, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, República Checa  
República de Moldova, Rumania, Suiza.]

---